

## LA RESPUESTA BRITÁNICA FRENTE A LA CRISIS DESATADA POR LA COVID-19

**Susana Sánchez Ferro**

*Profesora Titular de Derecho Constitucional  
Universidad Autónoma de Madrid*

**Cómo citar este artículo / Citation:** Sánchez Ferro, Susana. (2020). La respuesta británica frente a la crisis desatada por la covid-19. Biglino Campos, P.; Durán Alba, F. *Los Efectos Horizontales de la COVID sobre el sistema constitucional: estudios sobre la primera oleada*, Colección Obras Colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza.  
DOI: <https://doi.org/10.47919/FMGA.OC20.0022>

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN II. DIVERSIDAD NORMATIVA Y CORONAVIRUS. II.1. La *Public Health (Control of Disease) Act 1984* II. 2. La *Civil Contingencies Act 2004*. II.3. La *Coronavirus Act 2020*. III. DIRECCIÓN POLÍTICA AL INICIO DE LA PANDEMIA. IV. LA LEGISLACIÓN DELEGADA PARA AFRONTAR LA PANDEMIA. V. EL PAPEL DEL PARLAMENTO BRITÁNICO DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19. VI. DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL Y MEDIDAS ECONÓMICAS PARA PALIAR LA CRISIS. VII. CONCLUSIÓN. VIII. BIBLIOGRAFÍA

### I. INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019 China comunicó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en su territorio se había detectado una nueva enfermedad que cursaba con neumonía de origen desconocido. El 30 de enero de 2020 la OMS confirmó la existencia de una emergencia internacional y el 11 de marzo del mismo año declaró que la enfermedad se había convertido en una pandemia<sup>1</sup>. La covid-19 se multiplicaba por todo el continente europeo.

---

<sup>1</sup> Thomsom e Ip, 2020: 2.

En el Reino Unido, el Gobierno británico dictaba el 10 de febrero de 2020 una norma delegada destinada a afrontar los primeros efectos del Coronavirus<sup>2</sup>: *The Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020*<sup>3</sup>. Antes de que se aprobase la *Coronavirus Act 2020*, en el mes de marzo de dicho año, el Reino Unido contaba con dos instrumentos fundamentales para hacer frente a aquellas enfermedades infecciosas que amenazasen la salud pública de la población: las leyes de salud pública y la *Civil Contingencies Act 2004* que podríamos traducir como Ley de emergencia civil, en una traducción algo libre<sup>4</sup>. El Ministro de Sanidad dictó la *Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020* conforme a la habilitación concedida por los artículos 45B, 45C, 45F y 45P de la Ley de salud pública: *The Public Health (Control of Disease) Act 1984*<sup>5</sup>. La norma de 10 de febrero de 2020 sería posteriormente derogada por la *Coronavirus Act 2020*, que incluyó preceptos equivalentes<sup>6</sup>. Las medidas recogidas en las *Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020* fueron aplicables únicamente en Inglaterra<sup>7</sup> porque la salud es una competencia descentralizada en el Reino Unido. En Gales la *Public Health (Control of Disease) Act 1984* es también la norma aplicable en este ámbito, pero es el Gobierno galés el competente para tomar medidas de política de salud en su territorio, mientras que en Escocia e Irlanda del Norte están en vigor leyes que atribuyen poderes similares a dichas entidades territoriales: la *Public Health etc. (Scotland) Act 2008* y la *Public Health Act (Northern Ireland) 1967*<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> Una norma en gran medida equivalente a lo que en nuestro país sería un decreto legislativo, si bien en el Reino Unido la delegación por el Parlamento puede recaer en los ministros y en otros órganos.

<sup>3</sup> El procedimiento para dictar estas normas delegadas normalmente se establece en la propia ley de delegación. Este tipo de normas se conocen habitualmente como *Statutory Instruments (S.I.)*. Simson Caird y Patterson, 2020: 6. La ley de delegación no sólo establece las condiciones para la elaboración de la norma, sino que fija además el grado de control parlamentario que recaerá sobre ellas [May: 2004:669].

<sup>4</sup> *Idem*: 12.

<sup>5</sup> 1984 c.22 (“the 1984 Act”). La parte 2A, en donde se sitúan estos artículos, fue incluida por la “sección” 129 de la Ley de salud y cuidado social: the Health and Social Care Act 2008 (c.14) (“the 2008 Act”), que modificó la Ley de salud pública de 1984.

<sup>6</sup> Joint Committee on Human Rights, 2020: 13.

<sup>7</sup> La salud fue una de las competencias que fueron “devueltas” a las otras entidades territoriales autónomas que conforman el Reino Unido (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) en el proceso de descentralización territorial conocido como *devolution*. Sobre dicho proceso en español vid. mi contribución al libro *Cooperación y reparto competencial en los estados descentralizados* [Sánchez Ferro, 2013: 33-83]. En todo caso, antes de que comenzara a implementarse el proceso de *devolution* y a funcionar plenamente en el año 1999 ya existían sistemas de salud diferentes en cada uno de estos territorios (vid. sobre ello, : Nicholson, Elspeth y Shuttleworth, Kelly, 2020: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/devolution-nhs>).

<sup>8</sup> Paun, Shuttleworth, Nice, Sargeant, 2020:

<https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-and-devolution>

Por lo tanto, mientras que en España el Gobierno reaccionó en un primer momento recurriendo a la declaración del estado de alarma, las primeras medidas que se tomaron en el Reino Unido para afrontar la posible expansión del virus se adoptaron bajo el paraguas de la legislación sanitaria por parte de las diferentes entidades territoriales (el Gobierno del Reino Unido actúa también como Gobierno de Inglaterra), tanto en el caso de las adoptadas en el mes de febrero, como en el de las aprobadas posteriormente, cuando se hizo evidente que el virus no era solo cuestión de unos cuantos casos importados, sino una realidad dentro del país. Y todo ello pese a que muy poco antes de declarar el confinamiento de la población, en el mes marzo, el Parlamento británico había aprobado, como ya mencionamos, una ley específica para afrontar el coronavirus, la *Coronavirus Act 2020*.

## II. DIVERSIDAD NORMATIVA Y CORONAVIRUS

Las autoridades británicas contaban con varios instrumentos que podrían haberse utilizado para afrontar la pandemia, cada uno con sus peculiaridades y con un alcance diverso. Al comienzo de la crisis llegó incluso a aprobarse a toda velocidad una norma específica que en teoría serviría para afrontar mejor la pandemia, la *Coronavirus Act 2020*. El análisis del marco normativo vigente entonces nos permitirá contar con una visión más completa de lo que sucedió en este país en términos jurídicos.

### 1. La *Public Health (Control of Disease) Act 1984*

La *Public Health (Control of Disease) Act* fue aprobada en 1984 y reformada en el año 2008 a través de la *Health and Social Care Act 2008*, teniendo en cuenta la experiencia vivida en 2003 en relación con el SARS<sup>9</sup>. La ley da poderes a las autoridades locales para que puedan tomar una serie de medidas para proteger la salud sin autorización judicial y también contempla otras medidas que pueden adoptarse por los ministros pero que deben ser autorizadas por un juez de paz (estos jueces son normalmente legos y es la Corona quien los nombra: *Justice of the Peace/Magistrates*). Las autoridades locales pueden, por ejemplo, requerir a una persona para que se aísle; si la persona no está

---

<sup>9</sup> Walker y Blick, 2020: post en *Just Security*. Con la cobertura de esta ley se habían aprobado ya otras normas delegadas que abordaban aspectos diversos relacionados con las crisis sanitarias: la *Health Protection (Notification) Regulations 2010*; la *Health Protection (Local Authority Powers) Regulations 2010* y la *Health Protection (Part 2A Orders) Regulations 2010* [Vid. sobre el contenido de estas normas Joint Committee on Human Rights, 2020: 13].

dispuesta a cooperar, la autoridad local podrá requerir al juez de paz para que dicte una orden compeliendo al sujeto a obedecer el requerimiento (Parte 2A, sección 45 G de la ley). En todo caso antes de que se pueda invocar la norma es preciso que las autoridades locales y los jueces de paz consideren que hay pruebas de que existe una infección o contaminación (las leyes delegadas fijarán el nivel de evidencia necesario para ello) y que la misma represente un riesgo significativo para la salud, además de constatar que existe un riesgo de que la infección se extienda y afecte a otras personas; se debe por otro lado determinar que es preciso actuar para erradicar o reducir el mencionado riesgo<sup>10</sup>.

Otras secciones de la Parte 2A de la ley de salud pública otorgan al ministro competente la competencia para dictar legislación delegada con el fin de proteger la salud pública<sup>11</sup>. La sección 45 C de la ley permite al Ministro adoptar medidas de carácter interno. Esta sección establece que el Ministro competente podrá, mediante legislación delegada (*Regulations*), adoptar medidas para prevenir, proteger contra, controlar o dar una respuesta en casos de contaminación o frente a la incidencia de una infección o a la diseminación de una infección en Inglaterra y Gales (ya sea por un riesgo originado allí o en otro lugar)<sup>12</sup>. Ahora bien, la sección 45D (3) de la norma impide al Ministro imponer directamente a la población general a nivel interno cualquiera de las medidas que se contemplan en los epígrafes a) a d) de la sección 45G (2) de la Parte 2A. La sección 45 G (2) de la Parte 2A de la ley establece once restricciones especiales (*special restrictions*) que el juez de paz puede imponer. Entre ellas a) obligar a la persona a someterse a examen médico (examen médico obligatorio), b) ordenar trasladar a la persona a un hospital o establecimiento adecuado, c) obligar a la persona a permanecer en el hospital o establecimiento adecuado (internamiento hospitalario) y d) ordenar a la persona aislamiento domiciliario o cuarentena<sup>13</sup>. Adicionalmente, la sección 45

---

<sup>10</sup> Griffith, 2020: 326. Pugh, 2020: 4.

<sup>11</sup> La sección 45 B, por ejemplo, titulada *Health Protection Regulations: international travel etc.*, establece que el ministro competente podrá adoptar legislación delegada para prevenir el daño a la salud pública que pueda derivarse de la llegada de barcos, aviones o trenes u otros medios de transporte o de la salida de los mismos; le da poderes para ratificar cualquier acuerdo internacional o acuerdo a secas que tenga relación con la diseminación de la infección o contaminación y le permite adoptar medidas de cuarentena en relación con el transporte internacional [Duffy, 2020: *UK Human Rights Blog*].

<sup>12</sup> Duffy, 2020: *UK Human Rights Blog*.

<sup>13</sup> Pugh, 2020: 4.

E impide también al Ministro que mediante legislación delegada imponga directamente tratamiento médico obligatorio (incluida la vacunación)<sup>14</sup>.

## 2. La *Civil Contingencies Act 2004*

Además de la Ley de salud pública de 1984, en el año 2004 se aprobó la *Civil Contingencies Act 2004* (CCA en adelante). Se trata de una norma de mayor alcance que la Ley de salud pública, concebida para ser aplicada en tiempos de emergencia para afrontar cualquier circunstancia o situación que suponga un peligro de serio daño para el bienestar humano o el medio ambiente en el Reino Unido o en parte del Reino Unido, así como para afrontar el fenómeno terrorista (vid. sección 19 (1) CCA). Una circunstancia o situación no se considera que suponga un grave daño al bienestar humano salvo que cause (entre otras cosas) pérdida de vidas humanas, enfermedades o lesiones o trastornos (desorganización) de los servicios de salud (sección 19 (2) CCA)<sup>15</sup>. La crisis del Coronavirus entraría claramente dentro del supuesto de hecho de la norma<sup>16</sup>.

La Parte 2 de la CCA confiere poderes a la Corona para que mediante *Order in Council*<sup>17</sup>, o a los ministros –si no hay tiempo suficiente para que se dicte una *Order in Council*–, apruebe legislación delegada (*Regulations*), pero únicamente si a) ha ocurrido una emergencia o está ocurriendo o está a punto de ocurrir, y b) es necesario y urgente regular la situación para prevenir, controlar o mitigar un aspecto o efecto de la emergencia<sup>18</sup>. Si se satisfacen estas condiciones, como indica el *Joint Committee on Human Rights* del Parlamento británico, la legislación delegada podrá contemplar medidas que se dirijan, entre otras cosas, a proteger la vida humana, la salud o la seguridad, a tratar la enfermedad o lesión, o a proteger o restaurar los servicios de salud, incluyendo cualquier medida que pudiera adoptarse por ley del Parlamento o a

---

<sup>14</sup> Pugh, 2020: 4.

<sup>15</sup> Joint Committee on Human Rights, 2020: 13.

<sup>16</sup> Existe un Registro de Riesgos a nivel nacional –*National Risk Register*– y la gripe está en la parte alta de la tabla, por ejemplo.

<sup>17</sup> En realidad, las medidas no las adopta la Corona como tal sino el Gobierno. Las *Order in Council* las aprueba la Monarca con el consejo del *Privy Council* [<https://www.parliament.uk/site-information/glossary/orders-in-council/>]. El *Privy Council* o Consejo Privado es el órgano en el cual se llega a un acuerdo interdepartamental sobre asuntos del Gobierno que, por razones históricas o de otro tipo, recaen en los Ministros como Consejeros Privados y no como Ministros al frente de una rama de la Administración [<https://privycouncil.independent.gov.uk/>].

<sup>18</sup> Joint Committee on Human Rights, 2020: 14.

través de la prerrogativa real. Existen, eso sí, ciertos límites, en tanto que esas medidas deben respetar la *Human Rights Act 1998* (HRA) y no pueden modificar lo dispuesto en la Parte 2 de la CCA –Sección 23 (5) de la ley<sup>19</sup>, deben ser limitadas geográficamente en correspondencia con la emergencia y no pueden implicar el servicio militar obligatorio, impedir la prohibición de huelgas en las industrias, incluir nuevos delitos o alterar las reglas del proceso penal<sup>20</sup>. Además, se requiere que las medidas sean adecuadas, necesarias y proporcionadas a la emergencia (sección 20 CCA), debiendo la persona que dicta la regulación incluir una declaración de que esto es así y de que se respetan los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos recogidos en la *Human Rights Act* (sección 20 (5) CCA)<sup>21</sup>.

La tramitación de la ley fue objeto de un largo período de consultas y de un debate parlamentario en toda regla. Por otro lado, las medidas que el Gobierno puede adoptar se sujetan a control judicial y parlamentario para evitar abusos de poder<sup>22</sup>. Su punto débil quizás está en el criterio que permite adoptar las medidas y que es la mera satisfacción de los ministros de que se dan los criterios que establece la ley, lo que podría dar lugar a limitaciones infundadas de los derechos de los ciudadanos<sup>23</sup>. Walker y Blick aseguran que la *Civil Contingencies Act 2004* era la que debería haber sido utilizada ante la crisis del Coronavirus por ser la opción más respetuosa con el constitucionalismo<sup>24</sup>. Por cierto, el debate sobre el recurso a la legislación sectorial o a la legislación general no sólo se ha producido en España como se puede observar.

### 3. La *Coronavirus Act 2020*

La *Coronavirus Act 2020* (Ley del coronavirus) fue aprobada por el procedimiento de urgencia en el Parlamento británico<sup>25</sup>. Comenzó su andadura

---

<sup>19</sup> *Idem*.

<sup>20</sup> Walker y Blick, 2020: *Just Security* (post). Señalan estos autores que el Gobierno insistió profusamente en 2004 en que las limitaciones están sujetas a un “triple candado” –*triple lock*–: las medidas que se impongan mediante la legislación delegada (*Regulations*) deben responder a la seriedad de la emergencia, a su necesidad y ser proporcionadas desde el punto de vista geográfico. La *Coronavirus Act 2020* sí permite alterar las reglas del proceso, y celebrar sesiones virtuales a través de links (sección 53 y Schedule 23 de la *Coronavirus Act 2020*).

<sup>21</sup> Walker y Blick, 2020: *Just Security* (post).

<sup>22</sup> *Idem*.

<sup>23</sup> *Idem*.

<sup>24</sup> *Idem*.

<sup>25</sup> Joint Committee on Human Rights, 2020: 14. El parlamento escocés pasó la llamada *Coronavirus (Scotland) Act 2020* en un solo día [Molloy, 2020: UKCLA post]. La *Coronavirus (Scotland) Act 2020*, pretendió suprimir los juicios por jurado y añadir excepciones a las reglas



parlamentaria el 19 de marzo de 2020, el 23 de marzo, lunes, tuvo lugar la segunda lectura en la *House of Commons* y el 25 de marzo de 2020, en solo seis días, se habían completado ya los trámites del procedimiento legislativo en ambas cámaras, la *House of Commons* y la *House of Lords* y la ley había recibido la sanción real<sup>26</sup>. Ante la entidad de la crisis, la ley obtuvo el apoyo de todo el arco parlamentario<sup>27</sup>. En fin, como cualquier ley que afecta a competencias “devueltas” a las entidades territoriales que gozan de autonomía y de acuerdo con la convención denominada *Sewel Convention* (que requiere el *legislative consent*), se recabó el consentimiento de las asambleas legislativas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que otorgaron su consentimiento<sup>28</sup>. La ley concede poderes a los ejecutivos de las tres entidades con autonomía ya mencionadas, que en relación con dichas competencias actuarían bajo la coordinación del Comité de emergencias civiles (*Civil*

---

probatorias en relación con la prueba referencial, pero dichas modificaciones se descartaron finalmente ante las protestas de los juristas escoceses [Walker y Blick, 2020: *Just Security (post)*]. Un análisis más detallado de la tramitación de la *Coronavirus Act 2020* puede encontrarse en Natzler, 2020: *Constitution Unit (post)*.

<sup>26</sup> Lord Sandhurst y Speaight, 2020: 1. Ya el 29 de febrero el periódico *The Times* reportaba que la siguiente semana (si bien luego fue más tarde) se introduciría legislación de emergencia dando poderes a las escuelas, *councils* (autoridades locales) y al resto del sector público para suspender leyes y tomar medidas sanitarias y de seguridad para poder afrontar la pandemia. *The Times* explicaba que Boris Johnson había tomado las riendas del asunto después de haber sido criticado por su tardía respuesta ante la crisis [“Three more cases bring coronavirus total in UK to 23. Emergency laws as fears grows over contagion”, *The Times*, sábado 29 de febrero del 2020]. En dicho artículo se relataba como el professor Chris Whitty, jefe médico de Inglaterra –*chief medical officer for England*–, uno de los dos principales asesores científicos de Boris Johnson durante toda la pandemia, había explicado a los ministros que restringir eventos masivos, cerrar escuelas y parar el transporte público podría allanar la curva de contagios, y que esto sería muy bueno para el NHS (el sistema nacional de salud), pero que no sería bueno para la sociedad [desde el principio de la pandemia el conflicto dentro del Consejo de Ministros fue si dar prioridad a la salud o a la economía y cómo encontrar el equilibrio entre ambos extremos].

<sup>27</sup> Tierney y King, 2020: *UKCLA (post)*. No está de más recordar, en todo caso, que en las últimas elecciones celebradas en el Reino Unido el partido conservador ganó 365 escaños de los 650 que conforman la Cámara de los Comunes, superando claramente la mayoría absoluta, mientras que el partido laborista obtuvo 202 parlamentarios y los nacionalistas escoceses del SNP 48 [<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8749/>].

<sup>28</sup> Sin este consentimiento la ley se puede aprobar igualmente, pero en general la convención se respeta. Esta convención se ha recogido en los “estatutos” de Escocia y Gales: la *Scotland Act 2016* y la *Wales Act 2017*, si bien sigue teniendo únicamente un valor político y no obliga jurídicamente. Lo que propugna la *Sewel Convention* es que el parlamento del Reino Unido “normalmente no legislará con respecto a asuntos que pertenezcan a las entidades territoriales objeto de devolución de competencias sin el consentimiento” de sus respectivas asambleas legislativas. Vid. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/sewel-convention>

*Contingencies Committee* -COBR-)²⁹. La ley es temporal, su vigencia se restringe a dos años, momento en el cual la ley expirará³⁰.

La ley, muy extensa³¹, modifica, entre otras cuestiones, los deberes relacionados con la salud y el ámbito socio-sanitario a la vista de la necesidad de priorizar recursos; incluye disposiciones para facilitar que médicos retirados puedan volver a trabajar en el NHS (el sistema sanitario británico), que los médicos puedan trabajar en puestos que no se corresponden con su especialidad, o que cualquier británico pueda ejercer como voluntario en el servicio de salud durante un tiempo determinado: el objetivo de la ley era contener el virus e incrementar la capacidad en materia de servicios sanitarios y sociales. Además, se contemplan cambios en materia de acceso a la educación y cuidado de niños, tales como la posibilidad de relajar las normas sobre el tamaño de las clases en las escuelas. Se introducen normas que ofrecen apoyo económico a los individuos que se ven obligados a aislarse domiciliariamente y no pueden acudir a trabajar, se equipara aislamiento domiciliario y baja laboral y se aborda también el caso de los autónomos. Se establecen normas sobre la posible suspensión de actividades en puertos y aeropuertos³²; se permite la restricción de eventos y reuniones; se introducen medidas para ayudar a los *councils* (autoridades locales) y a los médicos forenses para afrontar el incremento de muertes –como por ejemplo, permitir que solo los médicos certifiquen las defunciones sin necesidad de acudir a los médicos forenses³³– y se eliminan trabas burocráticas; se modifican aspectos del procedimiento ante juzgados y tribunales (para permitir el uso de tecnologías audiovisuales) y aspectos relacionados con el acceso a la justicia³⁴. Por último, la ley introdujo varias secciones para posponer determinados

²⁹ Tierney y King, 2020: *UKCLA (post)*.

³⁰ Pugh, 2020: 13.

³¹ El Proyecto tenía 321 páginas, 87 cláusulas y 27 *schedules* [Natzler, 2020: *Constitution Unit (post)*].

³² Tierney y King se muestran preocupados por la extensión de dicho poder de suspender actividades portuarias al depender en gran medida de la percepción de la propia ministra de transporte sobre el riesgo real y significativo de que como consecuencia directa o indirecta del coronavirus no haya fuerzas suficientes para mantener la seguridad fronteriza y por el instrumento elegido, *directives*, que son instrucciones de la ministra en este caso, así como por la duración, que aunque en principio se limita a seis horas se puede extender en el tiempo. Además les preocupa la falta de control judicial [vid. Schedule 20 de la *Coronavirus Act 2020* y Tierney y King, 2020: *UKCLA (post)*].

³³ Walker y Blick, 2020: *Just Security (post)*.

³⁴ Joint Committee on Human Rights, 2020: 14-15. “Coronavirus in the UK: Government get right to force people into self-isolation under emergency laws”, *inews.co.uk*, 17 de marzo de 2020 [https://inews.co.uk/news/coronavirus-in-the-uk-government-right-force-people-self-isolation-covid-19-outbreak-409392]. Molly, 2020: *UKCLA post*.



procesos electorales, en concreto las elecciones locales en Inglaterra y las elecciones intermedias en Irlanda del Norte (*by-elections*), o las elecciones para suplir las vacantes que quedasen en las circunscripciones (*constituencies*) en Gales. Además, se contempla la posibilidad de posponer otras elecciones, así como referéndums<sup>35</sup>. En fin, la ley expande los poderes del Gobierno, que ya habían sido ampliados por legislación delegada dictada a principios de febrero, en concreto por *The Health Protection (Coronavirus) Regulations*, de 10 de febrero de 2020, legislación delegada que fue precisamente derogada por la *Coronavirus Act*<sup>36</sup>.

El anexo 21 de la *Coronavirus Act* recoge los poderes en relación con las personas infectadas. Sólo se puede recurrir a este tipo de poderes si se cumplen varios requisitos. En primer lugar, dice la sección 4 (1), (a) que la incidencia o transmisión del coronavirus constituya una amenaza grave e inminente para la salud pública en Inglaterra, y (b) los poderes conferidos por la Parte 2A del Anexo sean un medio eficaz para retrasar o prevenir una mayor transmisión significativa del coronavirus en Inglaterra. El Ministro debe hacer una declaración previa en tal sentido antes de proceder a utilizar los poderes que la ley le confiere. Dicha declaración se había producido ya anteriormente con la *Health Protection (Coronavirus) Regulations*, del 10 de febrero de 2020. En segundo lugar, el individuo que ejerza los poderes que le confiere la ley debe tener argumentos razonables –*reasonable grounds*– para sospechar que la persona es potencialmente infecciosa<sup>37</sup>. Finalmente, los poderes contemplados en la norma sólo pueden ejercerse si se considera que son necesarios y proporcionados, bien porque sea en el mejor interés de la persona infectada, bien para proteger a otras personas, bien para el mantenimiento de la salud pública<sup>38</sup>.

En materia de libertades individuales, se dan poderes para controlar la infección a los *police constables* (que son la fuerza policial de menor rango en el Reino Unido), a los servicios de inmigración y a otras autoridades sanitarias (*public health officials*), aunque los dos primeros deben, en la medida en que sea posible, consultar a un *public health officer* antes de adoptar medidas, siempre que sea posible dadas las circunstancias. Estamos pues ante una

---

<sup>35</sup> Vid. Secciones 59 a 70 de la ley del Coronavirus.

<sup>36</sup> Pugh, 2020: 5.

<sup>37</sup> Schedule 21, s6 (1), s7(1), s8(1b), s13(1b),s.14(1b), s.15(5a).

<sup>38</sup> Schedule 21, s6(3);s7(3);s8(2); s13(6);s14(2);s15(2b).

extensión de los sujetos que pueden tomar estas medidas más allá de lo que establece la Ley de salud pública de 1984, que reconocía este tipo de poderes fundamentalmente a los jueces de paz<sup>39</sup>. Además, es preciso señalar que los *public health officers* –oficiales públicos de salud– no siempre son lo que se conoce como *public health consultants*<sup>40</sup>; pueden ser un *public health consultant* pero pueden ser también un funcionario designado por el Ministro para alguno o todos los fines de la ley<sup>41</sup>.

Los poderes que se otorgan a las autoridades sanitarias son: trasladar a una persona a un lugar adecuado para ser explorado y valorado. Una vez que se ha trasladado allí, las autoridades públicas sanitarias pueden requerir a la persona para que permanezca en dicho establecimiento por un período que no exceda de 48 horas, período en el que se le examinará y valorará. Si el examen confirma que la persona está infectada por coronavirus o el examen no es concluyente o hay elementos razonables para creer que la persona permanece infectada, entonces las autoridades sanitarias podrán adoptar otras medidas, tales como retener a la persona en un establecimiento concreto por un período de tiempo específico y aislarlo de otras personas durante ese tiempo. En el ejercicio de estos poderes, la autoridad pública sanitaria debe tomar en cuenta el bienestar personal del individuo y sus circunstancias personales y el período de “detención” (*detention*) –en el sentido de que se le priva de libertad ambulatoria, no de que se le detenga– no puede exceder de 14 días (este es el período estimado de incubación de la covid-19), pero con una excepción: si la autoridad pública sanitaria sospecha que la persona puede ser todavía potencialmente infecciosa al final del período de 14 días, podrá extender el período de “detención” por otro período específico (*for a further ‘specified period’*). Eso sí, en tal caso la autoridad sanitaria deberá revisar diariamente el estado del individuo y revocar la orden si determina que el individuo ya no es infeccioso. Este período específico no puede sobrepasar los

---

<sup>39</sup> Pugh, 2020: 5-6.

<sup>40</sup> Los *public health consultants* o consultores de salud pública son altos directivos o científicos superiores. Requieren habilidades en los tres 'dominios' principales de la salud pública (protección de la salud, mejora de la salud, salud pública), pero en la práctica pueden especializarse en un área [<https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/public-health/roles-public-health/public-health-consultants-and-specialists>].

<sup>41</sup> Schedule 21, 3 (2) [a]. Pugh advierte que en *The Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020* de febrero únicamente se permitía tomar estas medidas a profesionales sanitarios que trabajasen en el sistema inglés de salud (*Public Health England*) bajo la supervisión de un *registered consultant* o bien a un profesional registrado como *public health consultant* en el sistema inglés de salud. Pugh, 2020: 7.

14 días si el individuo está confinado en un sitio específico -palabras de la ley-, pero si se le requiere que permanezca en un sitio determinado aislado de otros entonces ese límite de 14 días no es aplicable<sup>42</sup>. En esto la Ley del Coronavirus difiere de la Ley de salud pública, pues esta última establece que si las medidas de “detención”, aislamiento o cuarentena establecidas por la legislación delegada sobrepasan los 28 días, entonces una persona (que será la especificada por la legislación delegada) podrá establecer que la medida sea revisada a intervalos específicos de 28 días o menos<sup>43</sup>. La sección 45 L de la ley establece además que en el caso de las medidas de “detención”, aislamiento o cuarentena que adopte un juez de paz, estas no podrán sobrepasar nunca los 28 días o el tiempo máximo (más corto) que fije la legislación delegada.

Se ha planteado la posible incompatibilidad de varios preceptos de la ley con el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que además forma parte de la legislación interna del Reino Unido por vía de la *Human Rights Act 1998*). Recordemos que este artículo dispone que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad” y que “[n]adie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: (...) e) Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo”. La primera duda surge en relación con la ausencia de límite temporal cuando una persona permanece aislada por orden de la autoridad pública. Pugh se plantea si ello podría contradecir el requisito de la necesidad de la previsibilidad de la ley y la exigencia de certeza. Se podría pensar que la falta de un límite temporal, dice este autor, se debe al desconocimiento sobre el propio SARS-CoV-2. Además, la ley contempla alguna garantía, pues una vez pasados los 14 días iniciales la medida debe ser revisada a diario, y además se permite recurrir la medida ante un *magistrate court*, que es una especie de tribunal formado por miembros de la comunidad que tienen formación y que trabajan a tiempo parcial<sup>44</sup>. Ello ofrecería garantías a la persona privada de su libertad; pero es verdad también que en la Ley de salud pública se establece un límite máximo de 28 días cuando la misma medida es ordenada por un juez de paz

---

<sup>42</sup> Pugh, 2020: 6.

<sup>43</sup> Part 2A, sección 45 F (7) y (8) *Public Health (Control of Disease Act) 1984*. Pugh, 2020: 8.

<sup>44</sup> Vid. Sobre los *magistrate courts* <https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/magistrates-court/>.

(sección 45L). Una privación de libertad prolongada en el tiempo y que no se sabe cuándo terminará parece contraria al artículo 5 CEDH, en cuanto que no cumple con el requisito de previsibilidad de la ley<sup>45</sup>. En cuanto al principio de proporcionalidad, también podría verse afectado. Recordemos que la ley permite privar de libertad a individuos “sospechosos” de ser potencialmente infecciosos; es posible que individuos asintomáticos pudieran suponer un riesgo de infección por coronavirus, pero si tal cosa se contemplara habría que dejar, dice Pugh, que el juicio sobre el riesgo que suponen dichos individuos fuera llevado a cabo por profesionales expertos en el campo de la salud y con base en los principios de necesidad y proporcionalidad y no, dejar, como hace la ley, que la policía de bajo rango, las autoridades de inmigración u “otras” autoridades sanitarias lleven a cabo dicho juicio<sup>46</sup>.

### III. DIRECCIÓN POLÍTICA AL INICIO DE LA PANDEMIA

El Gobierno británico fue de los Gobiernos europeos que más tiempo tardó en adoptar medidas contundentes contra el Coronavirus. Es verdad que a principios de febrero dictó legislación delegada (*Regulations*) con el fin de incrementar el poder del ejecutivo para actuar en determinadas esferas [*Health Protection (Coronavirus) Regulations*<sup>47</sup>, del 10 de febrero de 2020] con base en la habilitación contenida en la *Public Health (Control of Disease) Act 1984*. Esta regulación inicial permitía al Ministro de sanidad o a un consultor de salud registrado (*a registered public health consultant*), tomar una serie de medidas frente a aquellas personas que fueran sospechosas de estar infectadas por el coronavirus, y que se considerase que pudieran suponer un riesgo de contagio para otras personas. También permitía adoptar medidas frente a aquellas personas que hubieran llegado a cualquier parte del Reino Unido viniendo de una zona “infectada” en la que hubieran estado residiendo en el marco temporal de los 14 días previos a su llegada al país<sup>48</sup>. La norma planteaba

---

<sup>45</sup> Pugh, 2020: 10.

<sup>46</sup> Pugh, 2020: 12. Sobre las implicaciones que tendría el requisito de la proporcionalidad en relación con el confinamiento como medida de último recurso y el artículo 5 CEDH vid. Hickman, Dixon y Jones, 2020: 17.

<sup>47</sup> La *Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020* puede consultarse en <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/129/contents/made>

<sup>48</sup> Duffy, 2020: *UK Human Rights Blog*.

ciertos problemas jurídicos, si bien pronto fue derogada por la *Coronavirus Act*<sup>49</sup>.

Aproximadamente veinte días más tarde, el 2 de marzo del 2020, el periódico *The Times* avisaba de que el incremento de casos que se habían producido a lo largo del fin de semana indicaba que probablemente se estaba llegando al final de la fase de contención del virus y que pronto el país se adentraría en la siguiente fase, cuyo objetivo sería retrasar el pico de la pandemia<sup>50</sup>. El 1 de marzo Boris Johnson había visitado *Public Health England* y en su visita anunció que presidiría, por fin, una reunión del comité de emergencias “Cobra” al día siguiente. El partido laborista se mostró por entonces crítico con el Premier británico por haber tardado demasiado en tomar las riendas de la lucha contra la pandemia<sup>51</sup>. Sin embargo, la población por entonces aprobaba mayoritariamente la gestión de Johnson y las medidas gubernamentales, medidas que eran más bien orientativas, incluyendo mensajes como el lavado de manos. Los ministros seguían animando a la gente a seguir con su vida normal, más allá de que se tomasen ciertas precauciones, ante el temor de un colapso económico y con la convicción de que el pico de la pandemia se produciría en unos dos o tres meses<sup>52</sup>.

El día 3 de marzo de 2020 el Gobierno británico hacía público su Plan de Acción para luchar contra la pandemia (*Coronavirus Action Plan*)<sup>53</sup>. La intención inicial del Gobierno británico era la de dilatar lo más posible la expansión del

---

<sup>49</sup> Sobre los problemas jurídicos que plateaba dicha regulación puede verse Duffy, 2020: *UK Human Rights Blog*.

<sup>50</sup> *Idem*.

<sup>51</sup> “All options open on coronavirus, says Hancock as UK cases leap”, *The Times*, domingo 1 de marzo de 2020; “Work at home-the coronavirus doomsday plan”, *The Times*, 1 de marzo del 2020. *The Sunday Times* publicaba el domingo 1 de marzo lo que llaman el *leading article* con el siguiente título, creo que enormemente ilustrativo: “Liderar no es suficiente, el Primer Ministro debe ser visto liderando” –“It’s not enough to lead. Now the PM must be seen leading”. En dicho artículo el *Times* decía lo siguiente: “*Mr Johnson, who will hold his first Cobra meeting on coronavirus tomorrow, nearly three months after the start of the outbreak in China and a month after the first confirmed case in the UK, gives the impression that all that sounds like hard work. He was slower than other world leaders to talk to Xi Jinping, China’s president. The task of containing this coronavirus outbreak remains a vital one. Britain is not at the centre of it but is gradually moving up the league table of confirmed cases maintained by Johns Hopkins University in America. Even that must be subject to an element of guesswork, with epidemiologists pointing out that data on the extent and spread of the virus are a long way from perfect*”.

<sup>52</sup> “Britain prepares for prolonged spring outbreak of coronavirus”, *The Times*, 2 de marzo del 2020.

<sup>53</sup> Natzler, 2020: *The Constitution Unit (post)*. El primer contagio local de Coronavirus se documentó en la prensa el 29 de febrero del 2020: “Three more cases bring coronavirus total in UK to 23. Emergency laws as fears grow over contagion”, *The Times*, 27 de febrero del 2020.



virus para que el verdadero estallido de la epidemia se produjera en verano, cuando el NHS suele estar bajo una menor presión y los virus se transmiten, en teoría, más despacio (de esa forma el sistema de salud no se vería desbordado)<sup>54</sup>. El plan de acción pivotaba sobre cuatro ejes: *Contain, Delay, Research and Mitigate* (contener, retrasar, investigar y mitigar)<sup>55</sup>. El confinamiento de la población y el cierre generalizado de la economía para minimizar riesgos se consideraba prematuro en relación con el nivel de riesgo que suponía o que se pensaba que suponía el coronavirus<sup>56</sup>. Por su parte, el Grupo científico de Emergencias, encargado de aconsejar al Gobierno británico durante la pandemia, el *Scientific Advisory Group for Emergencies*, o SAGE ya avisaba el 8 de marzo de que, pese a la estrategia gubernamental de contención del virus, era muy probable que este se fuera extendiendo de forma significativa<sup>57</sup>. El primer ministro insistía en que las medidas drásticas debían ser tomadas en su justo momento, mientras resistía las presiones para cancelar eventos masivos o cerrar escuelas, como ya se venía haciendo en otros países, pues mantenía que tales medidas serían contraproducentes<sup>58</sup>.

---

<sup>54</sup> “Three more cases bring coronavirus total in UK to 23. Emergency laws as fears grow over contagion”, *The Times*, sábado 29 de febrero de 2020.

<sup>55</sup> “Quentin Letts: Boffins join PM to offer some cold comfort”, Quentin Letts, *The Times*, 4 de marzo del 2020.

<sup>56</sup> “Coronavirus: more stringent restrictions mean more economic damage”, Oliver Wright, *The Times*, 2 de marzo de 2020. En los pasos adoptados por Boris Johnson contra el Coronavirus han sido fundamentales dos de sus asesores, Chris Whitty, *government’s chief medical officer* y Patrick Vallance, *chief scientific adviser*. Vid. “Coronavirus: Boris Johnson stakes his reputation on the experts”, *The Times*, 13 de marzo de 2020.

<sup>57</sup> “Coronavirus: Boris Johnson keeps calm but Whitehall plans for worst”, *The Sunday Times*, 8 de marzo del 2020. El Grupo aconsejaría a Johnson al día siguiente entrar formalmente en la segunda fase del plan: *delay* en el marco de la segunda reunión del *Cobra emergency committee*. En esta segunda fase se introducirían medidas de distanciamiento social, pero no con carácter vinculante sino como meras guías de actuación de la población [“New ‘social distancing’ rules as covid-19 is declared pandemic”, *The Times*, 12 de marzo del 2020]. Así por ejemplo, se pedía a los mayores que permanecieran en casa y no socializaran durante un período de tiempo que podría llegar a los tres meses, para así disminuir las muertes en un tercio, se les pedía que no fueran de crucero; se aconsejaba a las escuelas que no se hicieran viajes escolares transoceánicos, además de aconsejar a las familias que si un miembro de la familia tenía fiebre o tosía, toda la familia hiciera cuarentena [“Boris Johnson lays bare coronavirus threat: ‘Many more families are going to lose loved ones’”, *The Times*, 14 de marzo del 2020; Coronavirus: millions of over-70s will be told to stay at home for four months”, *The Times*, 16 de marzo del 2020].

<sup>58</sup> “Boris Johnson: Drastic action on coronavirus will be taken at right time”, *The Times*, 10 de febrero del 2020. Vid. sobre las mencionadas presiones: “The times view on Boris Johnson’s handling of the coronavirus outbreak: Lockdown dilemma”, *The Times*, 11 de marzo del 2020, donde se mencionaba el confinamiento de Italia o el artículo “Pressure grows on Johnson to act as Ireland shuts schools”, *The Times*, 12 de marzo del 2020. Si algo ha caracterizado a la política gubernamental ante la pandemia en el Reino Unido es la dura lucha intestina dentro del Gobierno entre los partidarios de dar prioridad a la economía y aquellos que pedían medidas más duras para luchar contra el virus, habiendo algunos de los ministros suavizado su posición



El 13 de marzo el *Times* informaba que Boris Johnson apostaba por la inmunidad de rebaño<sup>59</sup>, a lograr a largo plazo, siendo la estrategia contener el virus hasta el verano para que la NHS no se colapsara, seguramente considerando también cuestiones económicas, dado que la economía británica es una economía dominada por el sector servicios, con un sector financiero muy extenso y muy vulnerable a las crisis. Entretanto, en Escocia se cancelaban ya grandes eventos, de más de 500 personas, y en otras partes del mundo se confinaba a la población (en España el estado de alarma se declararía al día siguiente)<sup>60</sup>. En todo caso, esta estrategia no duraría mucho. El 16 de marzo, el Gobierno de Boris Johnson daba un giro de 180° en su estrategia después de que los científicos que asesoraban al Gobierno le transmitieron que el virus estaba diseminándose más rápido de lo esperado, y que la situación en Italia, que iba unas tres semanas por delante del Reino Unido en la expansión de la pandemia, mostraba que se necesitarían el doble de camas UCI de las que se habían contemplado en un principio si la

---

en uno u otro sentido, producto este cambio de opinión en ocasiones por haber contraído ellos mismos la enfermedad. Recordemos que el propio Boris Johnson contrajo la enfermedad a primeros de abril y el 6 de abril tuvo que ser ingresado en el hospital ante el agravamiento de sus dolencias, llegando incluso a temerse por su vida [vid. “Boris Johnson admitted to intensive care”, *The Times*, 6 de abril del 2020].

<sup>59</sup> Es verdad que más adelante, Matt Hancock, el Ministro de sanidad, declaraba que la inmunidad de rebaño, esto es, la idea de que si el 60% de la población cogía la enfermedad, se pararía la diseminación del virus, era, según él “un concepto científico, no un objetivo o una estrategia” del Gobierno [“The Times vie won Britain’s coronavirus plan: Clear and Calm”, *The Times*, 16 de marzo del 2020]. A la par, el Comité de sanidad de la *House of Commons (Health Select Committee)* anunciaba una sesión de emergencia para recabar pruebas en relación con la posición del Gobierno en materia de inmunidad de rebaño [“Coronavirus: N° 10 facing questions about herd immunity’s human cost”, *The Times*, 16 de marzo del 2020].

<sup>60</sup> “The Times view on Boris Johnson’s handling of the coronavirus crisis: No Immunity: the prime minister is gambling that allowing the virus to spread now will protect the economy in the long term. But Britain cannot shield itself from a global crisis”, *The Times*, 13 de marzo del 2020.

Por entonces los votantes seguían pensando en su mayoría que el Primer Ministro estaba gestionando bien la crisis –un 55%–, si bien mientras que un 78% de votantes conservadores se mostraban satisfechos, sólo un 37% de los votantes laboristas lo estarían (dos semanas antes los porcentajes eran 71% de conservadores, 48% de laboristas) [“Coronavirus: Ministers urged to come clean on model for British response”, *The Times*, 14 de marzo del 2020]. Vid. también “Coronavirus: schools told to isolate pupils with cough”, *The Times*, 16 de marzo del 2020.

El 14 de marzo *The Times* reportaba que Sir Patrick Vallance, uno de los principales asesores científicos del Gobierno, defendía que era imposible impedir que hubiera contagios, y que incluso defendía que no sería deseable evitarlos porque “cierta inmunidad en la población les protegería en el futuro”; en su opinión debían mantenerse los consejos dados para detener el virus, que eran eso, consejos, y no reglas obligatorias, porque suponían ya de por sí un paso importante y porque prohibir eventos masivos sería, en su opinión, un paso menor porque era mucho más probable coger el virus en un sitio cerrado a través de un familiar o un amigo [“Boris Johnson lays bare coronavirus threat: ‘Many more families are going to lose loved ones’ (ya citado)]

expansión del virus seguía a ese ritmo. Ante tal situación el Primer Ministro anunció la toma de una serie de duras medidas que, sin embargo, seguirían sin traducirse en la aprobación de nuevas normas jurídicas<sup>61</sup>. El 18 de marzo *The Times* daba cuenta de que los partidos políticos británicos habían consensuado una serie de medidas que incluirían en una ley una vez aprobadas en el Parlamento (lo que acabaría siendo la *Coronavirus Act 2020*)<sup>62</sup>. La ley, como ya dijimos, recibió la sanción real el 25 de marzo del 2020.

Previamente, el 20 de marzo, Boris Johnson anunciaba, sin ningún respaldo legal, que todos los pubs, clubs, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y centros de ocio deberían cerrar desde esa misma noche para parar la expansión del Coronavirus, calificando su orden como un consejo de salud pública –*public health advice*–, aunque avisando de que en caso de que no se siguiera “el consejo” se podrían utilizar las competencias en relación con las licencias de estos locales para forzarlos a ello<sup>63</sup>. Dos días más tarde, el 22 de marzo del 2020, el Primer Ministro anunciaba que estaba dispuesto a tomar medidas incluyendo un confinamiento total de la población y restringiendo los movimientos de las personas si no se actuaba responsablemente y se seguían las normas sobre distancia social, ante el gran número de personas que, debido al buen tiempo, inundaban parques, playas y mercados<sup>64</sup>. El 23 de marzo del 2020, Boris Johnson anunciaba que se procedía al confinamiento de la población.

---

<sup>61</sup> “Coronavirus: Britain in Lockdown”, *The Times*, 17 de marzo del 2020. Vid. también “Coronavirus: ten days that shook Britain — and changed the nation for ever. How Boris Johnson changed his priorities: save lifes first, and then salvage the economy”, *The Times*, 22 de marzo del 2020. La gente debería aislarse en su casa si algún miembro de la familia presentaba tos persistente o fiebre, se conminaba a la gente a evitar pubs, restaurantes, teatros etc., a los mayores de 70 se les pedía que permanecieran aislados en sus casas durante al menos tres meses, todo el mundo que tuviera la posibilidad debería trabajar desde casa y se debería evitar viajar salvo que fuera estrictamente necesario; ahora bien, la mayoría de las escuelas seguían abiertas y las medidas de distanciamiento social seguirían siendo voluntarias [“Lockdown Britain”, *The Times*, 17 de marzo del 2020]. Ante la pregunta sobre si era necesario forzar al cumplimiento de dichas medidas a través de medidas coercitivas, Boris Johnson declaraba que si fuera necesario se haría pero que la democracia británica era una democracia liberal madura y que la mayoría de la gente entendería dichos consejos [“Coronavirus: Britain in Lockdown”].

<sup>62</sup> Vid. el anuncio de la próxima tramitación de la ley y de su contenido en “Powers to force coronavirus test will be signed off without a vote”, *The Times*, 18 de marzo del 2020.

<sup>63</sup> “Coronavirus: Restaurants, pubs and gyms told to shut tonight”, *The Times*, 20 de marzo del 2020 y “Boris calls last orders and nor the only lock-in is at home”, Quentin Letts, *The Times*, 21 de marzo del 2020.

<sup>64</sup> “Coronavirus: Keep 2m apart or we’ll have to get tougher, warns Boris Johnson”, *The Times*, 22 de marzo del 2020.

Finalmente, el 26 de marzo el Ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, dictaba la *Health Protection (Coronavirus Restrictions) (England) Regulations 2020 (S.I. 2020/350)*, medidas legales que no se tomaban de acuerdo con la *Coronavirus Act 2020*, sorprendentemente, sino con base en la delegación legislativa de la *Public Health (Control of Disease) Act 1984*. El porqué, tendremos oportunidad de tratarlo más adelante.

#### IV. LA LEGISLACIÓN DELEGADA PARA AFRONTAR LA PANDEMIA

Por razones de espacio no podemos llevar a cabo un análisis pormenorizado de cada una de las normas delegadas dictadas en el Reino Unido para afrontar la primera ola de la pandemia por lo que nos centraremos en las medidas tomadas en Inglaterra, sin perjuicio de que alguna vez hagamos alguna referencia puntual a las demás medidas tomadas en otros territorios [la salud es competencia de las entidades territoriales con autonomía política y de ahí que al optarse por aprobar las medidas de lucha contra la pandemia vía legislación sanitaria existan normas diferentes emanadas por los órganos competentes de las cuatro naciones que componen el Reino Unido: Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra]<sup>65</sup>.

El Gobierno británico aprobó la *Health Protection (Coronavirus Restrictions) (England) Regulations 2020 (S.I. 2020/350)*, en adelante *Coronavirus Restrictions, Regulations*, el 26 de marzo del 2020. Esta “legislación delegada” es aplicable solo a Inglaterra<sup>66</sup>. Su legitimidad deriva de la habilitación legislativa contenida en la *Public Health (Control of Disease) Act 1984*<sup>67</sup>. Estas

---

<sup>65</sup> Al comienzo de la pandemia el apoyo a la posición del Gobierno fue muy amplio, tanto dentro del propio partido conservador, como de los demás partidos del arco parlamentario, de las entidades territoriales que conforman el Reino Unido y de la población en general, aunque poco a poco irían creciendo las discrepancias [*Constitution Unit*, 2020: 1]; se produjeron algunas discrepancias entre las entidades territoriales, pero pocas y en asuntos menores [Paun, Sargeant, Nice, 2020: 1, 3-5]. Vid. Hickman, Dixon y Jones, 2020: 2 y 7-9, donde se explican esas pequeñas diferencias en la normativa.

<sup>66</sup> En Gales, Escocia e Irlanda del Norte se publicaron normas similares con alguna pequeña variación [Walker y Blick, 2020: *Just Security (post)*]. En el caso de Gales, las normas también se apoyaron en la *Public Health Act* de 1984, mientras que en el caso de Irlanda del Norte la legislación delegada derivaba de la *Public Health (Northern Ireland) Act*, de 1967, y en el de Escocia en el Anexo 19 del *Coronavirus Act 2020*, que replicaba lo dispuesto en estas otras leyes sanitarias que acabamos de mencionar para permitir a Escocia dictar legislación delegada para hacer frente a la situación [Hickman QC, Dixon, Jones, 2020: 1].

<sup>67</sup> En concreto, la legislación derivaba de las secciones 45C, 45F y 45P de la *Public Health (Control of Disease) Act 1984* que habilita al Ejecutivo, en este caso al ministro, para dictar legislación delegada en los casos de lucha contra enfermedades infecciosas [Walker y Blick,

*Regulations* imponían restricciones en el funcionamiento de empresas y negocios y amplias restricciones en la libertad personal, bajo la amenaza de sanción al que incumpliera la legislación aprobada<sup>68</sup>. La norma establecía, por ejemplo, que ninguna persona podría abandonar su casa “sin una excusa razonable” (reg. 6(1)). Entre las excusas que se considerarían razonables se enumeraban más de una docena, pero no se trataba de un elenco cerrado<sup>69</sup>. Por otro lado, la norma impedía a las personas juntarse en un número determinado en los espacios públicos: se prohibía que más de dos personas se juntasen en un espacio público, salvo que fueran todos miembros del mismo hogar, que fuera necesario para trabajar, que el motivo fuera el asistir a un funeral, cuando fuera necesario para realizar una mudanza, dar cuidado o asistencia a una persona vulnerable, dar asistencia de emergencia, tomar parte en actuaciones judiciales o cumplir con una obligación jurídica (Reg (7)). La policía tenía, además, poderes para, en caso de incumplimiento de la norma, conminar a las personas incumplidoras a volver a su lugar de residencia, o llevarlas a la misma usando fuerza razonable si fuera necesario, pero siempre tomando en cuenta el criterio de la necesidad y la proporcionalidad, y para

---

2020: *Just Security (post)*]. La sección 45C, a la que complementa también la sección 45 F dispone lo siguiente:

“*Health protection regulations: domestic*

(1)*The appropriate Minister may by regulations make provision for the purpose of preventing, protecting against, controlling or providing a public health response to the incidence or spread of infection or contamination in England and Wales (whether from risks originating there or elsewhere).*

(2)*The power in subsection (1) may be exercised—*

(a)*in relation to infection or contamination generally or in relation to particular forms of infection or contamination, and*

(b)*so as to make provision of a general nature, to make contingent provision or to make specific provision in response to a particular set of circumstances”.*

<sup>68</sup> Thomson e Ip, 2020: 7. Las sanciones por incumplimiento de la obligación legal iban de las 60 libras a las 960 libras si se incumplían más de una vez (y se le imponía más de una vez las conocidas como *fixed penalty notices*) [Reg. (9) y (10)]. Posteriores *Regulations* subieron el importe máximo de las multas a 10.000 libras en el caso de la organización de fiestas ilegales, por ejemplo [Cormacain, 2020: 7].

<sup>69</sup> Se consideraba una excusa razonable salir para obtener artículos de primera necesidad, ejercitarse solo o con miembros de un único hogar diferente al propio, buscar asistencia médica, dar cuidados a personas vulnerables, en caso de padres separados, seguir los acuerdos de guarda y custodia, viajar por razones de trabajo (si no era posible trabajar en casa), ir a un funeral (generalmente solo un miembro del hogar del fallecido o un familiar cercano), acceder a servicios públicos críticos como guarderías o servicios sociales, evitar daños o lesiones, o cumplir con una obligación legal [Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations, Reg. 6 (2) en sus diferentes apartados]. La *Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020*, está redactada en este punto en los mismos términos que la norma inglesa [Vid. King, 2020: *UKCLA (post)*].

dispersar a la gente cuando fueran tres o más las personas que estuvieran reunidas en un espacio público (Reg (8))<sup>70</sup>.

A pesar del apoyo que suscitaron las medidas del Gobierno entre el público en general, la doctrina puso pronto en duda que la ley de salud pública permitiera dicho confinamiento. En opinión de la mayoría de la doctrina la norma sería *ultra vires*, por ir más allá de lo que permitiría la ley de salud pública<sup>71</sup>. Sólo algún autor aisladamente defendió que la norma era perfectamente válida<sup>72</sup>.

La Ley de salud pública, en su sección 45C (3) (c), permite al Gobierno dictar normas que impongan o permitan imponer restricciones o requisitos a las personas, o en relación a personas, cosas o locales, en el caso de, o en respuesta a una amenaza a la salud pública de los ciudadanos. De acuerdo con la sección 45C (4) se podría impedir a un niño ir a la escuela, prohibir o restringir la celebración de un evento o reunión, imponer una restricción o requisito relacionado con el manejo, transporte, entierro o cremación de cadáveres<sup>73</sup> o el manejo, transporte o disposición de restos humanos, y finalmente, imponer una restricción o requisito especial, según la letra (d) de dicha sección, que es la sección controvertida, puesto que en ella basaría el Gobierno su competencia para ordenar el confinamiento. Estas restricciones o requisitos especiales que pueden imponerse son aquellos que vimos en un epígrafe anterior que podía autorizar un juez de paz: los enumerados en la sección 45 G de la ley, pero con limitaciones en el caso del Gobierno<sup>74</sup>. Estas

---

<sup>70</sup> Vid. también Thomson e Ip, 2020: 8. Hickman, Dixon y Jones consideran que esta parte de la normativa es inconstitucional en tanto que es el policía o incluso un *community Support officer*, que no es exactamente un policía el que puede adoptar dicha medida y además puede hacerlo conforme a un criterio subjetivo, si “considera” que es necesario y proporcionado para el cumplimiento de la norma, no se recurre a un test de razonabilidad objetivo ni se trata de un arresto con las garantías del mismo [Hickman, Dixon, Jones, 2020: 6].

<sup>71</sup> El 6 de julio del 2020 el juez Lewis rechazó otorgar permiso para revisar si la norma es *ultra vires* pero el 4 de agosto del 2020 Lord Justice Hickinbottom ordenó que la decisión fuera revisada por la *Court of Appeal*, que si decide dar permiso para revisar el caso debería escuchar argumentos también de carácter sustantivo sobre la norma [Craig, 2020b: *UKCLA (post)*]. Además de su supuesta falta de cobertura legal, algunos autores han puesto de manifiesto que las *Regulations* de las que estamos hablando no cumplirían con el requisito establecido en la sección 45F (5) de la Ley de sanidad pública de establecer una vía para poder recurrir las medidas ante un tribunal (*right of appeal to a magistrates’ court*) [Brandreth y Sandhurst (QC), 2020: 7].

<sup>72</sup> King, 2020a y b: *UKCLA (post)*. En favor de las tesis de King, Wilberg, 2020: *UKCLA (post)*.

<sup>73</sup> En relación con este tema y como curiosidad para el lector, cuando se debatió la *Coronavirus Act*, cien parlamentarios, liderados por la responsable laborista de igualdad, firmaron una enmienda para que se eximiera a ciertas religiones de que se les cremara si morían de coronavirus. “Coronavirus: Government agrees to six-month time limit on emergency laws to avoid rebellion: MPs concerned emergency powers would last too long without necessary review”, Richard Vaughan, inews.co, 23 de marzo del 2020.

<sup>74</sup> Sección 45 (6) (c) (a) de la Ley de salud pública de 1984.



limitaciones al Gobierno vendrían impuestas por la sección 45D (3) de la mencionada ley y de acuerdo con ellas el Gobierno no está autorizado a forzar a alguien a someterse a un examen médico, b) tiene prohibido imponer el traslado de cualquier persona a un centro hospitalario o c) su internamiento en el mismo o d) imponer a una persona el aislamiento o la cuarentena. El único apartado que podría entenderse que autorizaría al Gobierno a confinar a la población sería el 45 G (2) (j) de la ley, que permite al juez de paz imponer a una persona restricciones sobre a dónde puede ir o con quién puede tener contacto esa persona, ya que el Gobierno estaría habilitado para tomar medidas equivalentes a través de las *Regulations*. Para King esta disposición podría interpretarse en el sentido de permitir el confinamiento también de grupos de personas<sup>75</sup> y por extensión de una parte significativa de la población, que es lo habría hecho el Gobierno<sup>76</sup>. Para la mayoría de los autores, sin embargo, dicha interpretación no sería válida. Primero porque estamos ante una norma limitativa de derechos, por lo que, se señala, la misma debería ser interpretada restrictivamente<sup>77</sup>. Además, estamos ante una medida que se dirige sólo a individuos concretos sobre los que el juez de paz ha determinado que están infectados, por lo que no debería poder extenderse por arte de birlibirloque a toda la población; existe, dice Craig, una gran diferencia entre un grupo de personas que podrían estar infectadas y toda la población británica<sup>78</sup>; en otro orden de razones, la sección en cuestión habla de restricciones de a dónde va la gente o con quién pueden tener contacto las personas, no pone el foco en que se queden en casa, y dada la naturaleza extremadamente restrictiva de la medida, una medida tan restrictiva de la libertad debería, se indica, ser contemplada expresamente en la norma para poder ser adoptada por el Gobierno y no debería ser construida por vía interpretativa<sup>79</sup>. Leyendo la

---

<sup>75</sup> Pues la sección 45J confirma que el término persona en la ley hace también referencia a un grupo de personas.

<sup>76</sup> King, 2020a: *UKCLA (post)*. En favor de las tesis de King, Wilberg, 2020: *UKCLA (post)*. King apoya su posición en las modificaciones introducidas en la Ley de salud pública de 1984 en el año 2008 y en la finalidad que según él éstas tendrían, que sería permitir al Gobierno afrontar situaciones críticas desconocidas como la actual incluso restringiendo libertades individuales. En definitiva se apoya en la intención del legislador; Hickman, Dixon y Jones rebaten que la interpretación de la intención del legislador de King sea la correcta [Hickman, Dixon y Jones: 13].

<sup>77</sup> Anderson, 2020: <https://www.daqc.co.uk/2020/03/26/can-we-be-forced-to-stay-at-home/>

<sup>78</sup> Anderson, 2020: <https://www.daqc.co.uk/2020/03/26/can-we-be-forced-to-stay-at-home/> y Craig, 2020: *UK Human Rights Blog*.

<sup>79</sup> Anderson, 2020: <https://www.daqc.co.uk/2020/03/26/can-we-be-forced-to-stay-at-home/>. Vid los argumentos legales que apoyarían esta posición en Hickman, Dixon y Jones, 2020: 11-12. Vid. también Hickman 2020a: *UKCLA post*; *Joint Committee on Human Rights*, 2020: 9 y Lord Sandhurst y Speaight, quienes son de la misma opinión [Lord Sandhurst y Speaight, 2020: 7].



ley de salud pública sistemáticamente, dice el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Británico, se deduce que las medidas restrictivas de la libertad que implican además uso de la fuerza por parte de las autoridades públicas deben ser tomadas únicamente por los jueces y no por el Gobierno<sup>80</sup>.

Las *Regulations* se han enmendado en varias ocasiones<sup>81</sup> pero en todo caso las dudas sobre su validez permanecen inalteradas<sup>82</sup>.

Otro problema claro de las *Regulations* afecta al derecho de reunión y manifestación, que forman parte de la *Human Rights Act 1998*, norma ésta que recoge los derechos del CEDH. Recordemos que no se permitían reuniones de más de dos personas en los espacios públicos. En este punto el *Comité Conjunto de Derechos Humanos* del Parlamento británico ha puesto en duda, evidentemente, que la normativa respetara los artículos 10 y 11 del CEDH, aunque precisa que la policía sí dejó que se celebraran ciertas

---

Estos últimos autores opinan que la Ley de Sanidad Pública no daría a la policía cobertura legal suficiente para parar a las personas y preguntarles hacia dónde se dirigen y qué van a hacer y poder comprobar así si la excusa para salir de casa es o no razonable [*idem*: 8-9]. Por otro lado, el *Joint Committee on Human Rights* de la *House of Commons* y la *House of Lords* criticaba, al igual que la prensa, el uso discriminatorio que las fuerzas de seguridad habían hecho de sus poderes de policía. Así los sujetos asiáticos, negros y pertenecientes a minorías étnicas habían recibido un 1.6 más de “multas” (*Fixed Penalty Notices*) que los blancos [vid. *Joint Committee on Human Rights*, 2020: 24]. Además, no existía un derecho para apelar estas *Fixed Penalty Notices*.

<sup>80</sup> *Joint Committee on Human Rights*, 2020: 5. Craig añade que en las modificaciones que sufrió la ley de salud pública en el año 2008 se puso de manifiesto que las interferencias en los derechos de libertad y propiedad de los ciudadanos deberían ser autorizados por los jueces, cumpliendo así con la separación de poderes en este ámbito y pone en duda la interpretación de la intención del legislador que lleva a cabo King [Craig, 2020: *UK Human Rights Blog*].

Existiría un problema adicional en relación con la posición de King a favor de la validez de la norma. La sección 45D (3) de la Ley de sanidad pública ya hemos visto que limita los poderes del Gobierno. El Gobierno tiene prohibido imponer el aislamiento o la cuarentena. La cuestión es si el confinamiento de la población en los términos vistos sería equivalente a una cuarentena. Para King, el confinamiento no sería equivalente a la cuarentena, puesto que la cuarentena se impone para prevenir el riesgo de transmisión de la enfermedad mientras que el confinamiento persigue, según el autor, evitar las relaciones sociales entre personas que podrían transmitir la enfermedad, o bien que podrían cogerla, y no supondría un estigma, como si lo sería la cuarentena; además, añade, el confinamiento se dirigiría a evitar que el sistema de salud se colapse, y no a controlar los casos de infección [King, 2020 b: *UKCLA (post)*]. Pero como dicen Hickman, Dixon y Jones, es difícil llegar a pensar que el Parlamento no quiso que el Gobierno pudiera imponer una medida de aislamiento o cuarentena a una persona o a un grupo de personas sin autorización judicial y que sin embargo sí deseaba permitir el confinamiento de toda la población en casa [Hickman, Dixon y Jones, 2020: 12-13].

<sup>81</sup> El 21 de abril se aprobaba la *Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (Amendment) Regulations 2020*, que introducía algunos cambios menores en la primera legislación delegada (vid. Cormacain, 2020: “Coronavirus Amendment...”). El 12 de mayo se aprobaba la *Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (Amendment)9 (Nº2) Regulations* [un desglose de su contenido en Cormacain, 2020: *UK Constitutional Law Association*].

<sup>82</sup> Walker y Blick, 2020: *Just Security (post)*.

manifestaciones, prohibiendo otras, sin que el criterio para permitir unas y no otras estuviera claro (y fuera imparcial) o la prohibición fuera proporcionada<sup>83</sup>.

Por lo demás, se acusa a algunos preceptos de la *Public Health (Control of Disease) Act* 1984 de cierta indeterminación, lo que dañaría la seguridad jurídica y la cláusula del Estado de Derecho<sup>84</sup>. Por último, la contradicción existente entre las guías que el Gobierno publicó para informar a la ciudadanía de las medidas adoptadas, e incluso las declaraciones de autoridades policiales, y las propias normas provocó una gran confusión en la ciudadanía y supuso un perjuicio para la *Rule of Law*<sup>85</sup>.

## V. EL PAPEL DEL PARLAMENTO BRITÁNICO DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19

Tras las elecciones generales del 12 de diciembre del 2019, en las que el Partido Conservador, encabezado por Boris Johnson, sacó un resultado histórico –365 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, que en la *House of Commons* está en 326 parlamentarios, y muy por encima también de los resultados obtenidos por el partido laborista, que sacó 203 escaños–, parecía que por fin el país se encaminaba hacia la conclusión del atribulado proceso del *Brexit*, tal y como rezaba el lema de la campaña del Partido Conservador: ‘*Get Brexit Done*’. Pero si Boris Johnson se las prometía felices en su andadura hacia un Reino Unido por fin libre de “las ataduras” de Bruselas, la realidad pronto frustró sus planes. Pocos meses después, todos los esfuerzos de su Gabinete estaban concentrados en un “enemigo” más

---

<sup>83</sup> *Joint Committee on Human Rights*, 2020: 25.

<sup>84</sup> Hickman 2020a: *UKCLA post* (donde se explican las mejoras que podrían introducirse para superar esta indeterminación y reforzar la legitimidad de la regulación). Una explicación clara de muchas de las ambigüedades de la ley en Brandreth y Lord Sandhurst, 2020: 7].

<sup>85</sup> Walker y Blick, 2020: *Just Security (post)*. Cormacain, 2020: *UKCLA (post)*; Se pueden ver ejemplos de la confusión generada en el informe del *Joint Committee on Human Rights*, 2020: 23-24, en Hickman, Dixon y Jones, 2020: 2-3, en Lord Sandhurst (QC) y Speaight (QC), 2020: 5 y en *Constitution Unit*, 2020: 6. Si bien como ya dijimos el apoyo de la población a las medidas tomadas por Johnson fue grande al comienzo de la pandemia, poco a poco dicho apoyo comenzaría a resquebrajarse y a crecer la desconfianza, a lo que sin duda contribuyó en no poca medida el viaje de Dominic Cummings, jefe asesor de Johnson, desde Londres a Durham bajo un pretexto ciertamente peregrino, rompiendo el confinamiento y la guía orientativa del Gobierno, así como la defensa exacerbada de Johnson a su Ministro a pesar de dicho comportamiento [*Constitution Unit*, 2020: 6].

fuerte y destructivo cuya amenaza se cernía, no sólo sobre la salud de los ciudadanos británicos, sino también sobre la economía del país: el coronavirus.

Más bien tarde que pronto, el Gobierno de Johnson presentó el proyecto de ley del Coronavirus, aprobado en un lapso temporal muy breve, en seis días, a finales de marzo del 2020, como ya explicamos. Sin embargo, un día después de que se aprobara esta ley, el Gobierno británico decidió proceder a la aprobación de legislación delegada recurriendo a la delegación legislativa recogida en la *Public Health (Control of Disease) Act*. ¿Por qué motivos recurrió el Gobierno a esta ley cuando se acababa de aprobar una ley específica para luchar contra la epidemia? Se preguntarán ustedes, probablemente perplejos ante esta aparente incoherencia. Veámoslo.

En primer lugar, la Ley de salud pública a la que recurrió el Gobierno británico es menos exigente en materia de garantías que aquella otra norma que mencionábamos al principio del capítulo y que se había diseñado precisamente para abordar situaciones de emergencia, incluidas las emergencias sanitarias: la *Civil Contingencies Act*<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> La *Civil Contingencies Act* concede muchos más poderes al ejecutivo –que puede elaborar preceptos cuyo contenido puede ser idéntico al de las leyes del Parlamento o a las medidas tomadas gracias a la *Royal Prerogative*– pero a cambio introduce más salvaguardas que la Ley de salud pública (vid. la síntesis de ambas que hemos realizado al inicio de este trabajo). Además, la CCA somete al Ejecutivo a un mayor control parlamentario [Brandreth y Sandhurst (QC), 2020: 3].

La CCA no permite, por ejemplo, introducir cambios en las reglas del procedimiento penal; las medidas adoptadas no pueden estar en vigor más de 30 días, aunque después se pueda dictar una nueva regulación siguiendo lo dispuesto en la ley y reintroducir medidas idénticas si se quiere; es obligado depositar las normas que contienen las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el Parlamento tan pronto como sea razonablemente posible, y si el Parlamento no dicta una resolución aprobatoria a los siete días de haber sido depositadas termina su vigencia. Si el Parlamento no está reunido, porque se está en un período entre sesiones (la *prorogation*, que cierra una sesión hasta que se abre el siguiente período de sesiones) o nos encontramos con que cualquiera de las dos cámaras se encuentran en un período de tiempo determinado, acotado, en el que no se reúnen, porque las sesiones están suspendidas (que no terminadas como en el caso de la *prorogation*), pero en el que los asuntos parlamentarios pueden continuar como antes, lo que se conoce como *adjourned* [Cowie, 2019: 7], el *Speaker* de la cámara respectiva o la Monarca deberá convocarlas para que puedan ejercer su función de control (sección 28 de la CCA), cosa que no ocurre en el caso de la Ley de Sanidad, en el marco de la cual estos períodos de *prorogation* o *adjourned* no computan en relación con el plazo que se da para que si el Parlamento no se pronuncia en ese plazo la norma pierda vigencia.

Añadido a lo anterior, la legislación que se apruebe bajo el paraguas de la CCA será tratada como legislación secundaria, a pesar de que pueda modificar leyes, lo que tiene implicaciones de cara a la *Human Rights Act 1998*, porque en tales casos el control de constitucionalidad al que se someten estas normas consideradas como legislación secundaria puede dar lugar a una declaración de nulidad por incompatibilidad con la *Human Rights Act* –y consiguientemente con el CEDH que es el canon de control de la *Human Rights Act*–. El control de constitucionalidad de la legislación primaria o asimilada a la legislación primaria da lugar

En segundo lugar, la Ley de sanidad pública contenía un procedimiento legislativo de urgencia en la sección 45R que le permitía aprobar legislación delegada (*Regulations*) sin control previo del Parlamento –a diferencia del procedimiento ordinario recogido en esa misma ley–<sup>87</sup>. A este procedimiento de urgencia recurrió el Gobierno británico. Las medidas aprobadas por el procedimiento de urgencia no son sometidas a control parlamentario hasta un momento muy posterior al de su aprobación y mientras tanto conservan su vigencia. Las *Coronavirus Restrictions Regulations* se hicieron siguiendo ese procedimiento extraordinario regulado en la sección 45R de La ley de salud pública. Las normas aprobadas por el procedimiento de urgencia deben ser depositadas ante el Parlamento, eso sí, y conforme a la mencionada sección de la ley, si el Parlamento no confirma las *Regulations* en 28 días estas dejarían de estar en vigor<sup>88</sup>; ahora bien, según la Ley de salud pública, en el cómputo del plazo de 28 días no computan los períodos en los que ambas cámaras no están en período de sesiones o si alguna está en un período de receso<sup>89</sup> y, esto es precisamente lo que ocurrió en este caso: Matt Hancock, el

---

simplemente a una declaración de incompatibilidad con la Constitución (y con el CEDH) que no lleva aparejada la nulidad, con lo que el control de la norma en el caso de la CCA produce efectos más devastadores en la norma aprobada por el Ejecutivo que los efectos que pueda tener el control judicial de la normativa delegada aprobada por medio de la Ley de Salud Pública [Walker y Blick, 2020: *Just Security (post)*. Vid. también Brandreth y Sandhurst (QC), 2020: 13].

En fin, la CCA exige que se nombren coordinadores de Emergencia para Irlanda del Norte, Escocia y Gales, y también para cada región de Inglaterra, sujetos a dirección por los ministros.

<sup>87</sup> La aprobación de normas por el Gobierno bajo la habilitación de la sección 45C de la Ley de salud pública debe seguir normalmente un procedimiento que requiere que no se aprueben las medidas hasta que un borrador de las mismas haya sido depositado y aprobado mediante resolución por ambas cámaras antes de que las medidas entren en vigor [*draft affirmative procedure*], y ello por la profunda afectación a derechos individuales que suelen conllevar [vid. Hickman, 2020d: 3 y la sección 45Q (4) (a) *Public Health (Control of Disease) Act 1984*], pero en el procedimiento de urgencia el procedimiento es el inverso, se aprueban las *Regulations* y entran en vigor de forma inmediata conforme a la urgencia que se supone que existe para tomar las medida, y la norma es posteriormente depositada en el Parlamento para que este la controle *a posteriori* (y tomando en cuenta lo que sucede si el Gobierno no las aprueba en el plazo de 28 días con las especialidades vistas) [vid. también, específicamente sobre la elaboración de *Regulations* en la Ley de salud pública, Cormacain, 2020b: 6]. Sobre los mecanismos de aprobación de normas delegadas y su control parlamentario puede verse May, 2004: 674 y ss.

<sup>88</sup> S. 45r (4) *Regulations contained in an instrument made in accordance with subsection (2) cease to have effect at the end of the period of 28 days beginning with the day on which the instrument is made unless, during that period, the instrument is approved—*

*(a) in the case of English regulations, by a resolution of each House of Parliament;*

*(b) in the case of Welsh regulations, by a resolution of the National Assembly for Wales.*

S. 45 (7) (7) *Subsections (4) and (5) do not—*

*(a) affect anything done in reliance on the regulations before they ceased to have effect, or*

*(b) prevent the making of new regulations.*

<sup>89</sup> Constitution Unit, 2020: 1.

Ministro de Sanidad británico, elaboró las *Coronavirus Restrictions, Regulations* a la una del mediodía del 26 de marzo –recordemos que la *Coronavirus Act* se había recibido la sanción real el día anterior pero que el Gobierno no optó por su utilización–, y el mismo día 26, a las dos y media del mediodía, las depositaba en el Parlamento y entraban en vigor<sup>90</sup>. El día anterior, el 25 de marzo, ambas Cámaras del Parlamento británico habían iniciado un receso –de forma anticipada a la Semana Santa, debido a la crisis– que duraría hasta el 21 de abril<sup>91</sup>. Así, la legislación delegada no se debatió hasta primeros de mayo – el 4 de mayo en la *House of Commons* y el 12 de mayo en la *House of Lords*–, siendo aprobadas el 14 de mayo, cuando ya el Primer Ministro había anunciado cambios en la norma que se materializarían en *The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020 (SI 2020/500)*<sup>92</sup>.

Ciertamente, en un primer momento podría pensarse que la utilización del procedimiento de urgencia previsto en la Ley de salud pública, en vez del procedimiento ordinario, podría tener sentido para cortar de raíz la pandemia, aunque hay incluso quien lo pone en duda<sup>93</sup>, pero lo que quizás no se entiende tanto es que este mismo procedimiento siguiera siendo utilizado más adelante –con la merma para la función de control del Parlamento que ello supone– para reformar las *Regulations* existentes con el objetivo de relajar las restricciones impuestas al inicio de la pandemia –no ya para endurecerlas– una vez que la expansión del virus había disminuido de forma considerable (Hickman)<sup>94</sup>. Seis

---

<sup>90</sup> Vid. Hickman, 2020d: 3. Una enumeración de la legislación delegada posterior aprobada bajo el paraguas de la *Public Health (Control of Disease) Act 1984* en Hickman, 2020d: 2-3.

<sup>91</sup> Vid. <https://www.parliament.uk/about/faqs/house-of-commons-faqs/business-faq-page/recess-dates/> y <https://www.parliament.uk/about/faqs/house-of-lords-faqs/lords-recess-dates/>. Se llegó incluso a barajar que el Parlamento suspendiera sus trabajos por cinco meses pero afortunadamente finalmente esto no fue así [“Parliament could be shut for months to tackle coronavirus”, *The Times*, 5 de marzo del 2020].

<sup>92</sup> Estas últimas *Regulations* se elaboraron el 12 de mayo y entraron en vigor a medianoche, siendo depositadas en el Parlamento el 13 de mayo a las 9:30 de la mañana [vid. sobre todo esto, Hickman, 2020d: 3-4]. Sobre la insuficiencia del desarrollo del debate en ambas cámaras en relación con las *Public Health (Coronavirus Restriction) (England) Regulations (SI 2020/350)* vid. *idem*. Una descripción de las diferentes modificaciones de las *Regulations* –la primera de ellas fue modificada el 22 de abril– y de la aprobación de nuevas *Regulations* el 3 de julio del 2020, el 26 de agosto del 2020 y el 13 de septiembre para ir adaptando las medidas a las nuevas circunstancias en Hickman, 2020d: 3-5.

<sup>93</sup> Hickman señala que si la Ley del Coronavirus pudo hacerse en 6 días, para elaborar las *Regulations* podría haberse seguido el procedimiento llamémosle ordinario de la ley de salud pública para la elaboración de este tipo de normas, bastando con haber introducido algunas pequeñas modificaciones en las *Standing Orders* del Parlamento para que la aprobación previa del Parlamento hubiera podido ser más rápida [Hickman, 2020d: 5].

<sup>94</sup> Hickman, 2020: *UKCLA (post)*.



meses después de la aprobación de las primeras normas, continuaba aprobándose normas (legislación delegada) bajo el procedimiento de emergencia<sup>95</sup>.

Ya en la tramitación de la *Coronavirus Act* el Gobierno había tratado en cierta medida de disminuir el control parlamentario sobre la aplicación de la norma, aunque en ese caso la presión parlamentaria –también entre las filas conservadoras– acabó llevando al Gobierno a introducir en la ley una cláusula que obligaba a que la normativa delegada fuera revisada a los seis meses de su aprobación. El mecanismo implantado fue el siguiente: toda norma delegada aprobada por el Gobierno bajo la cobertura de esta ley dejaría de estar en vigor a los seis meses de su adopción; ahora bien, las mismas medidas podrían introducirse de nuevo mediante una nueva *Regulation* si fuera necesario. Esta salvaguarda era lógica dada la rapidez con la que se había elaborado la ley del coronavirus y los errores e incorrecciones sustantivas que la misma podía contener. Además, el alcance de los poderes atribuidos al Gobierno por la ley y el impacto serio que podía tener en las libertades de los ciudadanos provocaba temor en buena parte de los parlamentarios<sup>96</sup>. La ley contenía, por otro lado, una cláusula que limitaba su vigencia temporal a dos años, período tras el cual expirarían la mayoría de sus cláusulas<sup>97</sup>.

El deseo del Gobierno de evitar en la medida de lo posible los controles parlamentarios ha sido algo evidente en esta primera oleada del virus<sup>98</sup>. Para complicar aún más las cosas, el partido de la oposición por antonomasia, el Partido Laborista, estaba por entonces en un proceso de cambio de líder –Keir Starmer sería nombrado nuevo líder laborista el 4 de abril<sup>99</sup>–, lo que en cierta forma en un primer momento pudo debilitar el rol del principal partido de la oposición en la función de control al Gobierno, puesto que el nuevo líder aún

---

<sup>95</sup> Cormacain, 2020b: Executive Summary.

<sup>96</sup> “Coronavirus: Government agrees to six-month time limit on emergency laws to avoid rebellion: MPs concerned emergency powers would last too long without necessary review”, Richard Vaughan, inews.co, 23 de marzo del 2020. Walker y Blick, 2020: *Just Security (post)*. En todo caso, es verdad que el Ministro de Sanidad quedaba obligado en las *Coronavirus Restrictions Regulations* a revisar las medidas cada 21 días [regulation 3 (2); Hickman QC, Dixon y Jones, 2020: 4]. También en las respectivas regulaciones introducidas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte se obliga a los respectivos ejecutivos a revisar las medidas cada 21 días [Paut, Sargeant, Nice, 2020: 8].

<sup>97</sup> Molloy, 2020: *UKCLA (post)*.

<sup>98</sup> Vid. también “Boris Johnson is trampling on the power of MPs”, escrito por la diputada laborista Margaret Hodge en *The Times*, 12 de marzo del 2020, sobre el intento de Johnson de imponer nombramientos en un par de comités parlamentarios clave.

<sup>99</sup> *Idem*.



debía lidiar con la reestructuración de su partido y el giro político prometido hacia el centro izquierda, tras la estrepitosa derrota en las elecciones generales británicas del anterior líder del partido, Jeremy Corbyn. Ahora bien, poco a poco Starmer iría ganando protagonismo en la Cámara Baja.

Una manifestación más de este desdén hacia los mecanismos propios de la relación parlamento-gobierno en una monarquía parlamentaria se dio en relación con los anuncios del Primer Ministro a la prensa, priorizando esta frente al Parlamento: el propio *Speaker* de la *House of Commons*, Sir Lindsay Hoyle, hubo de llamar a capítulo a Johnson y sus ministros en más de una ocasión por su inobservancia de la convención según la cual los grandes anuncios de la política gubernamental deben ser hechos ante el Parlamento antes que ante la prensa o en conferencias de prensa<sup>100</sup>. El *Speaker* llegó incluso a declarar que la forma en la que el Gobierno había ejercido sus poderes para elaborar la legislación delegada (*secondary legislation*) bajo el paraguas de la Ley de salud pública de 1984 era totalmente insatisfactoria y había demostrado un total desprecio por el Parlamento<sup>101</sup>. Lady Hale, presidenta del Tribunal Supremo hasta enero del 2020, señaló que el Parlamento había terminado por sucumbir al Gobierno durante la pandemia de coronavirus<sup>102</sup>.

## VI. DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL Y MEDIDAS ECONÓMICAS PARA PALIAR LA CRISIS

Como ya tuvimos ocasión de apuntar con anterioridad, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra tomaron medidas muy similares en un principio para afrontar la pandemia<sup>103</sup>. La coordinación inicial con el Gobierno central fue

---

<sup>100</sup> Russell y James, 2020: *UKCLA (post)*.

<sup>101</sup> Hickman, 2020d: 1. *The Constitution Unit* pone de manifiesto algo muy interesante: a 24 de junio y de acuerdo con el *Coronavirus Statutory Instruments Dashboard*, de las *Regulations* elaboradas por el Gobierno para luchar contra el Coronavirus (cuyo contenido afectaba a las áreas más variadas), el 5% habían sido producto de borradores previos de la norma sometidos al control del parlamento (*laid in draft*), un 8% fueron *made affirmatives* (que requieren que el Parlamento los debata y apruebe pero que pueden estar en vigor semanas antes de que ello ocurra) y el 87% fueron *made negatives*, que no requieren la aprobación parlamentaria [*The Constitution Unit*, 2020: 5].

<sup>102</sup> "Parliament surrendered to government in coronavirus pandemic, says Lady Hale", *The Times*, 21 de septiembre del 2020; "Parliament surrendered role over Covid emergency laws, says Lady Hale", *The Guardian*, 20 de septiembre del 2020.

<sup>103</sup> Algún ejemplo de las pequeñas divergencias en las medidas adoptadas contra la pandemia en la primera ola puede verse en Paunt, Sargeant, Nice, 2020: 5.

prácticamente total<sup>104</sup>. Los anuncios sobre las medidas a seguir se realizaban de forma simultánea en todos los territorios, quitando algún que otro anuncio prematuro a la prensa de las medidas que se habían acordado por parte de Nicola Sturgeon, lo que molestó al Gobierno de Johnson. También supuso un punto de fricción con las entidades territoriales descentralizadas el hecho de que el Gobierno británico anunciase medidas que solo eran aplicables a Inglaterra sin aclarar tal extremo a los ciudadanos, que no sabían si las medidas que anunciaba el Gobierno eran aplicables a nivel nacional o solo local (recordemos que el Gobierno del Reino Unido es también el que gobierna Inglaterra desde un punto de vista de política territorial)<sup>105</sup>.

Las principales diferencias en la política a seguir comenzaron a surgir con la desescalada, una vez que la primera oleada del virus iba remitiendo<sup>106</sup>. Escocia y Gales fueron a un ritmo menor en la desescalada que Inglaterra e Irlanda del Norte y siguieron aplicando el lema de *'stay at home'*, que es el que se adoptó a comienzos de la pandemia, mientras que Inglaterra cambió su lema a *'stay alert'*<sup>107</sup>.

Por lo demás, si bien la satisfacción social con las políticas de Boris Johnson fue, en un principio, muy alta<sup>108</sup>, dicha valoración fue decayendo poco a poco<sup>109</sup>, sobre todo a raíz del escándalo del viaje de su asesor jefe Dominic Cummings de Londres a Durham en plena pandemia con una excusa más bien peregrina y saltándose todas las reglas de confinamiento<sup>110</sup>. A Boris Johnson le pasaron también factura los bruscos giros en su política gubernamental durante dichos meses (lo que los británicos llaman *U-turn*) y algún que otro fiasco, como el de la *app* para controlar el virus desarrollada en el Reino Unido que no llegó a implantarse. Por el contrario, la valoración social de Nicola Sturgeon, la

---

<sup>104</sup> Vid. "Devolved nations may break ranks if pandemic worsens", *The Times*, 11 de abril del 2020 y "Coronavirus has turned us from a divided nation into one of the most united", *The Times*, 14 de abril del 2020, haciendo referencia al fuerte Apoyo popular a las medidas tomadas.

<sup>105</sup> Paunt, Sargeant, Nice, 2020: 6. En este informe los autores ilustran algunas de esas confusiones; vid. también "Confusing messages are causing more anxiety", *The Times*, 7 de abril del 2020.

<sup>106</sup> Vid. "Coronavirus: A local lockdown for local people", *The Times*, 12 de mayo del 2020; "Coronavirus divisions threaten the Union", *the Times*, 13 de mayo del 2020; "Wales goes its own way and declares no need for coronavirus facemasks", *The Times*, 13 de mayo del 2020.

<sup>107</sup> Vid. por ejemplo, "Coronavirus, Scotland will stick with stay at home plea, says Sturgeon", *The Times*, 11 de mayo del 2020.

<sup>108</sup> Vid. "Britain backs the PM, even if Twitter doesn't", *The Times*, martes 24 de marzo del 2020 y "How pandemic is affecting politicians' approval ratings", *The Times*, 27 de abril del 2020.

<sup>109</sup> Vid. "Politics is back, and the polls show it", Curtis, *The Times*, 13 de mayo del 2020.

<sup>110</sup> "Dominic Cummins lockdown breach: What started as a storm is now a hurricane. Boris Johnson can't afford to throw his aide overboard", *The Times*, 31 de mayo del 2020.

líder escocesa, se mantuvo muy alta durante toda la primera oleada de la pandemia<sup>111</sup>, tan alta el nivel de apoyo a la independencia en estos meses subió en Escocia llegando al 54%<sup>112</sup>.

Adentrándonos finalmente en el problema económico generado por la pandemia, es preciso aclarar en primer lugar que el Gobierno central posee competencias económicas y financieras de mucha relevancia que afectan a todo el territorio nacional<sup>113</sup>. Rishi Sunak, el Ministro de Economía y Hacienda, reaccionó rápidamente ante la crisis con medidas contundentes, con lo que su figura ganó peso en el Gobierno<sup>114</sup>. Sunak declaró que haría todo lo que fuera necesario –*whatever action is required*– para mitigar los efectos económicos de la pandemia<sup>115</sup>. La inversión económica realizada en estos primeros meses de pandemia fue ingente. Algunos miembros del partido conservador temieron que el partido siguiera con esa política de gasto una vez hubiera pasado lo peor de la pandemia, aunque entendieron que en un primer momento dichas medidas eran necesarias. La política de fuerte gasto público no forma parte precisamente del ADN del Partido Conservador. La prensa puso de manifiesto como en cierta medida las diferencias políticas en relación con algunas políticas públicas en comparación con las defendidas por el partido laborista se estaban difuminando debido a la pandemia.

En materia económica sí surgieron más tensiones entre el Gobierno central y las entidades territoriales descentralizadas. Estas no sólo tienen competencia en sanidad, sino que son competentes también en otros ámbitos afectados por la pandemia, como el de la educación o los transportes públicos. Algunas de las medidas adoptadas por el Ministro en los sucesivos paquetes de estímulo gubernamental para paliar los efectos de la pandemia eran aplicables a todo el Reino Unido, otras se limitaban a Inglaterra<sup>116</sup>. Cuando el Gobierno británico

---

<sup>111</sup> Vid. “Coronavirus in Scotland: Even Labour voters and Tories support Sturgeon’s methods”, *The Times*, 2 de mayo del 2020.

<sup>112</sup> “Support for independent Scotland hits record high”, *The Times*, 22 de junio del 2020. Cada vez más escoceses pensaban que una Escocia independiente podría afrontar mejor los problemas sociales derivados de la pandemia y las necesidades propias de la sociedad escocesa.

<sup>113</sup> Paun, Sargeant y Nice, 2020: 1.

<sup>114</sup> Vid. “Chancellor Rishi Sunak steps in to save workers with historic rescue package”, *The Times*, 21 de marzo del 2020.

<sup>115</sup> “Firms need a tax break to help with coronavirus costs, Sunak told”, *The Times*, 9 de marzo del 2020.

<sup>116</sup> A nivel nacional el Gobierno británico creó el *Coronavirus Job Retention Scheme* financiando el 80% de los salarios de los empleados, hasta un máximo de 2500 £ mientras se obligaba a cerrar negocios, un esquema similar para los autónomos, un incremento en las prestaciones por baja laboral debida al Covid-19 o relacionada con esta enfermedad, por

invierte en servicios sólo en Inglaterra, eso genera una cantidad equivalente para el resto de territorios autónomos que se calcula en relación con su población. El cálculo se hace conforme a la conocida como fórmula Barnett. El dinero que las entidades autónomas reciben lo pueden gastar en lo que se deseen, siempre que sea en políticas que sean objeto de su competencia<sup>117</sup>. Sin embargo, lo cierto es que al final, si bien las entidades territoriales del resto del Reino Unido reciben dinero cada vez que el Gobierno británico invierte en servicios públicos en Inglaterra, el foco político no deja de estar en las necesidades inglesas: las inversiones en Inglaterra dan dinero sí, pero sólo se genera ese dinero cuando el Gobierno lleva a cabo inversiones que son necesarias en Inglaterra y en el momento en el que se requieren en esa parte del territorio, sin que tenga relevancia cuál sea la situación o las necesidades de las demás entidades territoriales.

Un nuevo problema surgió cuando el confinamiento empezó a relajarse en Inglaterra e Irlanda del Norte a un mayor ritmo que en Escocia y Gales. Los Gobiernos de estos territorios plantearon que si se terminaba con el plan de apoyo a la empresa, que era un plan nacional, ello afectaría a sus negocios, dado que la desescalada iba en estos territorios a un ritmo menor. Añadido a esto, Gales, Escocia e Irlanda del Norte se quejaron amargamente de tener una baja capacidad de endeudamiento y demandaron que “se les devolviera” una mayor capacidad de endeudamiento para poder llevar a cabo sus políticas públicas en una situación como la presente.

---

ejemplo si era necesario permanecer en cuarentena, el diferimiento del pago del IVA, la compra de deuda a largo plazo de grandes empresas y préstamos muy ventajosos a los pequeños negocios avalados por el Gobierno, además de otras medidas sociales como el conocido como *universal credit* [vid. Paut, Sargeant, Nice, 2020: 3; vid también: “Self-isolating workers will get sick pay from day one, says Boris Johnson”, *The Times*, 5 de marzo del 2020; “Sunak reveals coronavirus bailout for self-employed, but they must wait until June”, *The Times*, 27 de marzo del 2020; “Coronavirus furlough scheme extended to end of June”, *The Times*, 18 de abril del 2020 y “Universal credit’s biggest payday proves its real value”, *The Times*, 6 de mayo del 2020].

Las entidades territoriales tomaban también medidas enfocadas hacia sus sectores económicos más vulnerables. Escocia, por ejemplo, anunciaba pocos días después de que comenzara el confinamiento ayudas al sector pesquero, de importancia vital para la región [Paut, Sargeant y Nice, 2020: 5]. El plan para apoyar al pequeño empresario también diverge en cada uno de los territorios autónomos en algunos aspectos [*idem*].

<sup>117</sup> Vid. sobre la fórmula Barnett y el sistema de financiación de la descentralización mi contribución en el libro *Cooperación y reparto competencial en los estados descentralizados* [Sánchez Ferro, 2013:60-64] y sobre las propuestas de reforma de dicho sistema López Basaguren, 2015: 151-163].

## VII. CONCLUSIÓN

Si algo caracterizó a la primera ola de la pandemia en el Reino Unido, además de la reacción tardía del Gobierno británico a la hora de adoptar las primeras medidas contra el coronavirus, fue la propensión del Ejecutivo de Johnson a relegar al Parlamento a un segundo plano. En un momento inicial quizás la necesidad de actuar con urgencia podría excusar una mayor implicación del Parlamento en la determinación del rumbo a seguir para afrontar la crisis del coronavirus, pero una vez que los meses fueron transcurriendo tras el estallido de la pandemia, la falta de consideración al Parlamento por parte del Gobierno Johnson devino inaceptable. Los parlamentarios demandaron cada vez con mayor intensidad la necesidad de un mayor debate parlamentario sobre las implicaciones para la economía y la salud de la pandemia y sobre la priorización de una u otra. Sin embargo, la respuesta económica del Gobierno Johnson para paliar los efectos económicos de la pandemia sí fue rápida y contundente<sup>118</sup>.

Positiva fue también la buena coordinación intergubernamental que se produjo en esta primera ola entre el Gobierno central y los gobiernos de las entidades territorialmente descentralizadas en la adopción de las medidas sanitarias de lucha contra el virus. Por primera vez se producía una verdadera coordinación entre los autónomos. En fin, aunque las medidas adoptadas en cada territorio no fueron tan dispares, los ciudadanos británicos han sido conscientes quizás más que nunca de lo que significa vivir en un estado descentralizado, en el que ciertas políticas son responsabilidad de la periferia y no del centro. El Reino Unido era hasta el final del siglo pasado un país con un Ejecutivo fuerte y un sistema muy centralizado, donde casi todo se decidía desde Londres. El Gobierno Laborista de Tony Blair impulsó el proceso de *Devolution* a finales de los años noventa del siglo pasado, pero es quizás ahora cuando los ciudadanos han podido visualizar en mayor medida las implicaciones del mismo y su funcionamiento.

---

<sup>118</sup> Russell and James, 2020: *The Constitution Unit (post)*.

## VIII. BIBLIOGRAFÍA

- ANDERSON (QC), D.: “Can we be forced to stay at home?”, 26 de marzo de 2020, <https://www.daqc.co.uk/2020/03/26/can-we-be-forced-to-stay-at-home/>
- BRANDRETH, B. (QC) y LORD SANDHURST (QC): “Pardonable in the heat of a crisis –Building a solid foundation for action”, *Society of Conservative Lawyers*, 2020.
- Constitution Unit: “The Constitution under COVID-19”, Monitor 75, July 2020.
- CORMACAIN, R.: “Can I go to the park please Dad? Everyday lessons in legal certainty in the English Coronavirus Regulations”, *UK Constitutional Law Association*, 15 de mayo de 2020.
- “Coronavirus Amendment Regulations: The Government’s dubious response to the ‘out out’ defence”, *Bingham Centre for the Rule of Law*, 2020 (2020a).
  - “Parliamentary Scrutiny of Coronavirus Lockdown Regulations: A Rule of Law Analysis”, *Bingham Centre for the Rule of Law*, 2020 (2020b).
- CRAIG, R.: Lockdown: A Response to Professor King-Robert Craig”, *UK Human Rights Blog*, 6 de abril de 2020 (2020a).
- “Coronavirus Regulations Case reaches the Court of Appeal – Hearing Dates 29-30 October 2020”, *UK Constitutional Law Association*, 28 de octubre de 2020b.
- DUFFY, J.: “Corona-vires: Has the Government exceeded its powers?”, *UK Human Rights Blog*, 13 de febrero de 2020.
- GRIFFITH, R.: “Using public health law to contain the spread of COVID-19”, *British Journal of Nursing*, vol. 29, Nº 5, pp. 326-327.
- HICKMAN, T.: “Eight ways to reinforce and revise lockdown laws”, *UK Constitutional Law Association*, 16 de abril de 2020 (2020a).
- “A very English lockdown relaxation”, *UK Constitutional Law Association (post)*, 14 de mayo de 2020.
  - “Abracadabra Law-Making and Accountability to Parliament for the Coronavirus Regulations”, November 17, 2020d [Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3732097> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732097>].



- HICKMAN (QC), T., DIXON, E. y JONES, R.: “Coronavirus and civil liberties in the UK”, *Blackstone Chambers*, 6 de abril de 2020 (2020b).
- Joint Committee on Human Rights (House of Commons, House of Lords): “The Government’s response to COVID-19: human rights implications, Seventh Report of Session 2019-21 [HC 265-HL Paper 125], 21 de septiembre de 2020.
- KING, J.: “The Lockdown is Lawful”, *UK Constitutional Law Association (post)*, 1 de abril de 2020.
- “The Lockdown is Lawful: Part II”, *UK Constitutional Law Association (post)*, 2 de abril de 2020.
- LÓPEZ BASAGUREN, A.: “Escocia: el referéndum sobre la independencia y la propuesta de reforma de la Devolution”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 104, 2015, pp. 135-167.
- LORD SANDHURST (QC) y SEPAIGHT, A. (QC): “Pardonable in the heat of the crisis- but we must urgently return to the Rule of Law”, *Society of Conservative Lawyers*, London, 2020.
- MAY, E.: *Parliamentary Practice*, 23 ed., LexisNexis Butterworths, London, 2004.
- MOLLOY, S.: “Covid-19: Emergency Legislation and Sunset Clauses”, *UK Constitutional Law Association*, 8 de abril de 2020.
- NATZLER, D.: “Parliament and COVID-19: the Coronavirus Bill and Beyond”, *The Constitution Unit (post)*, 23 de marzo de 2020.
- NICHOLSON, W. y SHUTTLEWORTH, K.: “Devolution and the NHS”, Institute for Government, 2020 [<https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/devolution-nhs>].
- PAUN, A., SARGEANT, J. y NICE, A.: “A four-nation exit strategy: How the UK and devolved governments should approach coronavirus”, *Institute for Government*, mayo de 2020.
- PAUN, A., SHUTTLEWORTH, K., NICE, A. y SARGEANT, J.: “Coronavirus and devolution”, *Institute for Government*, <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-and-devolution>

- PUGH, Jonathan: “The United Kingdom’s Coronavirus Act, deprivation of liberty, and the right to liberty and security of the person”, *Journal of Law and the Biosciences*, Isaa11, pp. 1-14.
- RUSSELL, M. y JAMES, L.: “MPs are right. Parliament has been sidelined”, *The Constitution Unit*, 28 de septiembre de 2020.
- SÁNCHEZ FERRO, S.: “Devolution: el desarrollo de un nuevo sistema de relaciones interterritoriales en el Reino Unido”, en *Cooperación y reparto competencial en los estados descentralizados*, Institut d’Estudis Autònoms, 2013, pp. 33-82.
- SIMSON CAIRD, I., y PATTERSON, E.: “Brexit, Delegated Powers and Delegated Legislation: a Rule of Law Analysis of Parliamentary Scrutiny”, *Bingham Centre for the Rule of Law*, 20 de abril de 2020.
- THOMSON, S. e IP, E. C.: “COVID-19 emergency measures and the impending authoritarian pandemic”, *Journal of Law and Biosciences*, Isaa064, 2020, pp. 1-33.
- TIERNEY, S. y KING, J.: “The Coronavirus Bill”, *UK Constitutional Law Association (UKCLA) post*, 24 de marzo de 2020.
- WALKER, C. y BLOCK, A.: “Coronavirus Legislative Responses in the UK: Regression to Panic and Disdain of Constitutionalism”, *Just Security (post)*, 12 de mayo de 2020.
- WILBERG, H.: “Lockdowns, the principle of legality, and reasonable limits on liberty”, *UK Constitutional Law Association*, 23 de julio de 2020.